

**D.G.INFRAES.Y SERV.**

Exp.: A/SER-015769/2026

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

## MEMORIA JUSTIFICATIVA

**TÍTULO: ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIONES DE LA DAT NORTE DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

### JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ACUERDO MARCO:

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia.

El objeto del acuerdo marco es la determinación de las condiciones de prestación del servicio de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de todas las actuaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, tanto en la redacción de proyectos como en la ejecución de las obras de la DAT Norte, asegurando el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

El adjudicatario deberá realizar las actuaciones y, en su caso, redactar los documentos según la legislación vigente y las estipulaciones del PCAP.

Con fecha 3 de octubre de 2025 se aprobó el expediente de acuerdo marco para el servicio de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de proyectos y obras de la D.G. de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con 5 lotes, uno por DAT. Una vez finalizado el proceso de adjudicación, el lote 2, correspondiente a la DAT Norte, se declara desierto por orden de fecha 9 de abril de 2026, por lo que es necesaria la contratación de un nuevo acuerdo marco para la DAT Norte.

Los contratos basados en este acuerdo marco consistirán en la realización de alguna de las siguientes actuaciones:

- Redacción de Estudios o Estudios Básicos de Seguridad y Salud.
- Supervisión de Estudios de Seguridad y Salud y, en su caso, la Evaluación de Riesgos.
- Redacción de informes para la aprobación de Planes de Seguridad y Salud y sus anexos.
- Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de las obras y realización de informes sobre el estado de seguridad de la obra en el caso de paralizaciones totales o parciales y resolución de contrato.
- Redacción de otros estudios o informes complementarios necesarios en la redacción de proyectos, memorias valoradas y obras.

Es necesaria la contratación del servicio a una empresa especializada, ya que la administración no cuenta con los medios humanos y técnicos adecuados al estar actualmente estos dedicados plenamente al ejercicio de sus tareas propias.

Con la suscripción del Acuerdo Marco, al estar ya seleccionado el contratista, se facilita extraordinariamente la realización de los estudios, ya que no hay que realizar una nueva licitación y publicación de anuncio.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 94.016,64 euros.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1202727428757877580635**



## JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

### Introducción

La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 indica en su artículo 116. "Expediente de contratación: iniciación y contenido" que los contratos de servicios deben incluir un informe que justifique adecuadamente la insuficiencia de medios.

### Competencias

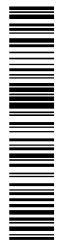
Corresponden a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, además de las competencias previstas en el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y de la dirección y coordinación con carácter general de las actuaciones que en el ámbito de su competencia desarrollen las Direcciones de Área Territoriales, las siguientes:

- a) La elaboración de la programación de las infraestructuras educativas y del equipamiento docente, así como la dirección, ejecución y desarrollo de los procedimientos administrativos, incluido los de contratación y los trabajos técnicos necesarios para su ejecución.
- b) Las actuaciones que sean necesarias para la obtención de las licencias correspondientes y la adecuación a inspecciones técnicas de los edificios destinados a uso educativo.
- c) La tramitación de los expedientes de contratación administrativa de obras, y los de servicios vinculados a las mismas, así como de los expedientes de gasto derivado de dichos expedientes, relativos a los programas presupuestarios que correspondan a todas las Direcciones Generales de la Consejería.
- d) La tramitación de los expedientes de contratación de los servicios y suministros cuando su objeto sea dotar de bienes y servicios a los centros docentes no universitarios. De los mismos se exceptúan los contratos administrativos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios escolares en materia de comedor, cafetería, limpieza, mantenimiento, seguridad y vigilancia.
- e) La supervisión de proyectos de obra, previa a la aprobación de los mismos por el órgano de contratación, cuya ejecución se realice con cargo a la Consejería, así como la ordenación, regulación y coordinación de los criterios técnicos para la realización de dichos proyectos, y el apoyo técnico en la gestión de la contratación administrativa de obras.
- f) El desarrollo de las inversiones relacionadas con la mejora de las tecnologías de la información y de la comunicación en los centros docentes en lo relativo a equipamiento informático y redes telemáticas, incluyendo los procedimientos administrativos de contratación y trabajos técnicos para su ejecución.
- g) La gestión económica de la prestación de los servicios de transporte y comedor de los alumnos y el personal que la normativa vigente regula como gratuitos, y la contratación de las correspondientes rutas de transporte.
- h) La tramitación de los expedientes de contratación de las obras, servicios y suministros de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales y los expedientes de gasto derivados de los mismos, así como la gestión económica de sus gastos de funcionamiento interno, incluyendo la gestión de los anticipos de caja fija con destino a las mismas.

### Análisis

En la fecha de redacción de este informe, la Subdirección General de Edificaciones Educativas de la Comunidad de Madrid cuenta cuatro jefes de Áreas funcionales (arquitectos) y 11 técnicos (4 arquitectos y 7 arquitectos técnicos), cuyas principales funciones son:

- La ejecución de infraestructuras educativas a nivel no universitario de la Comunidad de Madrid, más de 1.600 centros:
- La supervisión de proyectos de obra, previa a la aprobación de los mismos por el órgano de contratación, cuya ejecución se realice con cargo a la Consejería, así como la ordenación, regulación y coordinación de los criterios técnicos para la realización de dichos proyectos, y el apoyo técnico en la gestión de la contratación administrativa de obras.





- Las actuaciones que sean necesarias para la obtención de las licencias correspondientes y la adecuación a inspecciones técnicas de los edificios destinados a uso educativo
- Direcciones de obras y de direcciones de la ejecución de las obras.
- Informes sobre el estado de los centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
- Redacción de Relaciones Valoradas.
- Informes sobre los centros privados y subvencionados, para exigir el cumplimiento de la normativa legal
- Informes sobre centros universitarios.

En este momento se están realizando más de 300 actuaciones entre obra nueva, ampliaciones y reformas.

#### Conclusiones

Teniendo en cuenta el personal disponible, las tareas que están realizando y la dedicación necesaria para realizar las tareas objeto del contrato, se considera que no existen suficientes medios personales.

La Dirección General de Infraestructuras y Servicios considera oportuno ampliar los medios personales y materiales. En este sentido se han realizado reiteradas solicitudes a la Subdirección General de Personal de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, pero actualmente los medios personales y materiales son insuficientes.

En cuanto al estudio pormenorizado sobre la diferencia entre el coste que supondría la realización a través de personal propio o el que se deriva de su externalización, exigido por el Tribunal de Cuentas para la justificación de la insuficiencia de medios, se hace constar que la realización de este estudio sobre el coste de personal no es competencia de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios sino de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

#### JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

No obstante, en atención de la Consideración recogida en el informe del Servicio Jurídico en relación con el Proyecto de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este acuerdo marco sobre la necesidad de justificar la no ampliación de los medios personales y materiales y justificar la diferencia entre el coste que supondría la realización del servicio a través de personal propio o el que se deriva de su externalización, se complementa la presente memoria.

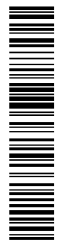
Para ello, se analiza el comparativo de costes entre el establecido para el presente acuerdo marco y el supuesto e hipotético caso de una ampliación de efectivos de la Dirección General de Infraestructuras, sin perjuicio de que la contratación de personal por parte de la Administración Pública, que responde a una oferta de empleo público anualmente publicada y posteriormente desarrollada, escapa a las competencias de la unidad promotora.

Así, para analizar la eficiencia de ambos casos (medio propio o contratación externa), es necesario considerar los mismos medios exigidos para la prestación del servicio y que, en caso de optar por su prestación directa debería provisionarse. Estos medios se refieren al personal mínimo exigido y su equipamiento.

El apartado 4.2 del PPT se desprende que el equipo mínimo exigible para la prestación del servicio es como mínimo:

- un interlocutor con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, o equivalente
- y un técnico con titulación de arquitecto, arquitecto técnico, o equivalente tener la formación complementaria acreditada como Coordinador en materia de Seguridad y Salud y/o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, al menos en la especialidad de Seguridad en el Trabajo y capacitado legalmente para desarrollar las funciones que el RD 1627/1997 les atribuye.

Asimismo, el mismo apartado 4.2 establece que el licitador debe disponer, con carácter mínimo, 1 Interlocutor y 1 técnico adscritos.





### Ampliación de los medios personales y materiales

#### Eficiencia de costes

Del análisis de coste del personal necesario se tiene que la contratación mediante acuerdo marco se debe articular mediante el refuerzo de la relación de puesto de trabajo (RPT) de la Administración, que supondrá un coste interno derivado de la contratación de 2 técnicos titulados, ya sea arquitecto o arquitecto técnico, como personal de la Administración.

El coste estimado de contratar un arquitecto y un arquitecto técnico como personal propio de la Administración resulta de considerar su retribución anual, el coste social del mismo (seguridad social, desempleo, formación, etc.), el coste administrativo (alquiler de espacio para su localización, con vigilancia, luz, teléfono, calefacción, etc.), el coste de sus seguros (seguro de responsabilidad civil), y otros gastos como dietas, desplazamientos, etc., tal como se refleja en la siguiente tabla:

|                        | Arquitecto (NCD 24) | Arquitecto técnico (NCD 20) |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Retribución            | 39.761,40 €         | 32.294,82 €                 |
| Costes sociales        | 9.940,35 €          | 8.073,17 €                  |
| Costes administrativos | 7.200,00 €          | 7.200,00 €                  |
| Seguros                | 677,97 €            | 609,44 €                    |
| Otros gastos           | 1.200,00 €          | 1.200,00 €                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>58.779,72 €</b>  | <b>49.377,43 €</b>          |

Considerando que el equivalente de efectivos que es exigido lo forman un técnico titulado superior y uno de grado medio, el coste anual del personal técnico sería, frente al coste anual del contrato:

| Titulados | 50% técnicos titulados superiores | 50% técnico de grado medio | Total anual aumento RPT | Coste Anual contrato |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2         | 58.779,72 €                       | 49.377,43 €                | 108.157,15 €            | 28.440,03 €          |

A la vista únicamente el coste de personal propio evaluado en 108.157,15 € anuales frente al coste del contrato de todo el Acuerdo Marco anual es de 28.440,03 € (con IVA).

Esta gran diferencia se explica por el carácter puntual de los servicios necesarios, ante la cual los contratistas tienen una capacidad de optimización de recursos al combinar servicios de múltiples clientes de la que la Administración carece.

#### Inmediatez de la cobertura de la necesidad

A los factores anteriores es necesario añadir otras cuestiones temporales, ya que, si se opta por personal propio, la dotación del puesto requerirá un plazo mayor al tener que realizar un proceso selectivo, que probablemente superaría el año, y resultaría incompatible con los plazos contractuales de ejecución de las obras, ya que una vez adjudicada la obra y formalizada su contratación, de conformidad con el artº 237 de la LCSP, el acta de comprobación de replanteo ha de suscribirse en el plazo de un mes, dando comienzo a la ejecución de las obras para las que se precisa el servicio.

#### Cuestiones de oportunidad

Otra de las cuestiones a tener en cuenta responde a un criterio de oportunidad, ya que la necesidad de este tipo de servicios no es continua, sino que responde a necesidades puntuales de la ejecución concreta de la obra. Dado el periodo desde el inicio de un contrato hasta la adjudicación del mismo, da lugar en ocasiones a la combinación de periodos de escasa ejecución de obras con otras de gran actividad, según se vayan produciendo las contrataciones. Esta flexibilidad en la necesidad queda perfectamente resuelta con la contratación del trabajo de forma externa, pudiendo acudir al mercado cada vez que los servicios sean necesarios y evitar la ociosidad del personal en los momentos de escaso volumen de servicio.

En consecuencia, se considera que la opción de contratación con terceros de los servicios de asistencia técnica para trabajos seguridad y salud para las obras es la opción más ventajosa para la Administración de la Comunidad de Madrid.



## JUSTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 219 DE LA LCSP

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 219.1 que los órganos de contratación del sector público podrán concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un periodo determinado, estableciendo la condición de que el recurso a este instrumento no se realice de forma abusiva y que la competencia no se vea obstaculizada, restringida o falseada.

Analizando el Acuerdo Marco objeto del expediente a la luz de las condiciones exigidas por la ley, hay que manifestar que este requisito se cumple: No se utiliza este instrumento de forma abusiva, ya que únicamente se contrata el servicio de realización de trabajos de dirección facultativa de las obras. En el presupuesto de 2026 el crédito de las partidas destinadas a infraestructuras educativas (62101 y 63100) asciende a 109.083.530,00 euros, por lo que el importe destinado a este acuerdo marco (importe anual) supone un 0,03% del total.

Por todo lo expuesto, se concluye que la utilización del acuerdo marco no se realiza de forma abusiva ni determina una obstaculización, restricción o falseamiento de la competencia, teniendo en cuenta además que el procedimiento que se utiliza es un procedimiento abierto, por lo que podrán participar los mismos licitadores que lo harían en un expediente ordinario y habitual de contratación de los que se viene utilizando con carácter general.

Por otro lado, para evitar que un solo empresario pudiera monopolizar la contratación de los servicios programados, se ha procedido a dividir el contrato en 5 lotes y solo se podrá adjudicar un lote por empresa.

Por consiguiente, se puede concluir que en el presente acuerdo marco se cumplen plenamente los requisitos exigidos en el artículo 219.1 de la LCSP.

## JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

El objeto de los contratos basados en este acuerdo marco, como se ha indicado anteriormente, consistirá en la realización de alguna de las siguientes actuaciones:

- Redacción de Estudios o Estudios Básicos de Seguridad y Salud.
- Supervisión de Estudios de Seguridad y Salud y, en su caso, la Evaluación de Riesgos.
- Redacción de informes para la aprobación de Planes de Seguridad y Salud y sus anexos.
- Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de las obras y realización de informes sobre el estado de seguridad de la obra en el caso de paralizaciones totales o parciales y resolución de contrato.
- Redacción de otros estudios o informes complementarios necesarios en la redacción de proyectos, memorias valoradas y obras.

La naturaleza del objeto del acuerdo marco, especialmente la coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de las obras, implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

Igualmente, se considera que la adjudicación a un único contratista de la totalidad de las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, garantiza la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, al poseer un conocimiento global e integrado de todas las cuestiones relativas en materia de seguridad y salud.

Por otro lado, en este tipo de acuerdo marco, en expedientes anteriores, se ha procedido a la división en lotes con un criterio de ámbito geográfico. En concreto, el expediente anterior del acuerdo marco de seguridad y salud se dividió en 5 lotes, uno por área territorial, habiendo resultado desierto el lote 2, correspondiente a la DAT Norte. Con la contratación de este acuerdo marco se pretende únicamente cubrir el servicio en la DAT Norte, por lo que no procede una mayor división.





En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se estima procedente la no división en lotes del objeto del contrato

### **JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO**

El valor estimado del acuerdo marco es un importe a tanto alzado que se estima suficiente para cubrir las necesidades de este tipo de trabajo en dos años (47.008,32 euros), que se multiplica por dos, al tener en cuenta la posibilidad de prórroga por otros dos años más (94.016,64 euros).

### **JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DEL ACUERDO MARCO**

Para la ejecución de las obras de construcción que se realizan para responder a la demanda de escolarización de la Comunidad de Madrid es necesaria la designación de un coordinador de seguridad y salud que realice sus funciones previamente al inicio de las obras con la aprobación del plan de seguridad y salud, así como durante el desarrollo de las obras especificadas, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Reglamento que la desarrolla. También es necesario, para dar cumplimiento al citado real decreto, la redacción y/o supervisión de un estudio de seguridad y salud para el proyecto de ejecución de las obras. Por ello se establece un plazo de vigencia del acuerdo marco de dos años, prorrogables por otros dos, de modo que la duración máxima es de cuatro años, que es el máximo legal establecido en el art. 219.2 de la LCSP.

Con la suscripción del Acuerdo Marco, al estar ya seleccionado el contratista, se facilita extraordinariamente la realización de los trabajos, ya que no hay que realizar una nueva licitación y publicación de anuncio, por lo que se propone la duración máxima para ahorrar el mayor tiempo posible en la tramitación de los contratos de servicios de control de calidad de obras y supervisión y control de calidad de proyectos y así agilizar la gestión de la construcción de infraestructuras educativas.

### **JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA**

La solvencia económica y financiera permite a la administración garantizar que el adjudicatario disponga de solidez económica suficiente para la ejecución del contrato que reduzca significativamente la probabilidad de impagos, paralizaciones o abandonos del contrato, evitando así perjuicios financieros para la administración. De igual forma la solvencia técnica proporciona a la administración garantías de que el adjudicatario es capaz de realizar lo contratado con los términos y calidades exigidas en sus pliegos. No obstante, ambas exigencias tanto solvencia económica y financiera y técnica, deben garantizar la mayor participación y concurrencia de licitadores por lo que deben ser proporcionales al alcance del contrato y acorde a la tipología de agentes que operan en el mercado de lo que se desea contratar.

En el apartado 8.4 del cuadro de características del acuerdo marco del PCAP se establece la solvencia económica y financiera y técnica exigida a los licitadores, permitiendo optar, de entre los criterios previstos en el artículo 87.1 de la LCSP, por el incluido en la letra a): *Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas*

Se establece un importe mínimo equivalente a una vez y media el importe estimado anual, y se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios *mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil*.





Este importe se considera suficiente para garantizar la solidez económica para la ejecución del contrato y es acorde con el establecido en el artículo 87.3.a) de la LCSP: *“El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato”*.

También se puede acreditar la solvencia económica y financiera por el método incluido en el apartado b): *“Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales”*

Se exigirá un importe igual al valor estimado del acuerdo marco. Este importe es acorde con lo preceptuado en el art. 87.3.b) de la LCSP, que establece que el importe de este seguro no será inferior al valor estimado del contrato. Las condiciones de acreditación son también las establecidas en dicho artículo 87 de la LCSP: *“se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda”*.

La solvencia económica y financiera, en cuantía guarda el adecuado equilibrio entre las características de los agentes que operan en este tipo de mercados que garantice una adecuada concurrencia y por otra, la necesidad de salvaguardar el control de riesgos, asegurar la continuidad operativa y fortalece la competitividad y transparencia del procedimiento.

Asimismo, la posibilidad de acreditar la misma mediante distintas formas facilita la concurrencia al adaptarse a la realidad y circunstancias que pueden darse entre las empresas del sector.

En el apartado 8.5 del cuadro de características del acuerdo marco del PCAP se establece la solvencia técnica o profesional.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 90.1.a) de la LCSP se establece como medio de acreditación de la solvencia técnica la “relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos”, estableciendo un importe mínimo anual acumulado en el año de mayor ejecución equivalente al 70% del importe anual.

Se toma como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del acuerdo marco la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

De acuerdo con el artículo 90.1.e) se exigen “títulos académicos del responsable de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma”, cumpliendo el requisito añadido en este apartado que es que “no se evalúen como un criterio de adjudicación”.

Las empresas deberán aportar la composición del equipo que realizará los trabajos objeto del acuerdo marco, que deberá estar integrado como mínimo por un 1 Interlocutor y 1 técnico. La titulación que deberá aportar es la exigida en la cláusula 4.2. del PPT: título de arquitectura o arquitectura técnica o equivalente. En el caso del técnico, además deberá tener formación complementaria acreditada como Coordinador en materia de Seguridad y Salud y/o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, al menos en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

De acuerdo con el artículo 76 de la LCSP, atendiendo a la complejidad técnica del contrato, se exige a las empresas licitadoras un compromiso de adscripción al contrato de los medios técnicos que se consideran imprescindibles para cumplir con el objeto del contrato. El número mínimo de técnicos a adscribir al acuerdo marco y la titulación exigida se indica en el apartado de solvencia técnica.

Los licitadores realizarán este compromiso cumplimentando la declaración responsable que consta en el anexo 2 del PCAP.

La experiencia mínima exigida en todos los casos será de cinco años y se acreditará (por las empresas propuestas como adjudicatarias) mediante la presentación de certificado de vida laboral, certificado de colegiación y currículum vitae firmado por el correspondiente trabajador.

Se indica, además, la obligación de garantizar el personal mínimo durante toda la duración del acuerdo marco y sus contratos basados. En el caso de que haya sustituciones de personal, se





deberá comunicar previamente, acreditando el cumplimiento del perfil solicitado.

La adscripción de medios al contrato se establece como obligación esencial, cuyo incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato basado en el que se produzca el incumplimiento.

Se considera que la adscripción de estos medios personales y materiales es proporcional a la entidad y características del contrato y no limita la participación de las empresas en la licitación.

Se trata de tareas de asistencia técnica en materia de seguridad y salud relativas a obras de construcción, y por tanto sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Dicha Ley establece, según el tipo de obra, la titulación a la que atribuye las funciones. Dado que el objeto de las obras es la construcción de edificios, la titulación exigida será de Arquitectura o Arquitectura Técnica o equivalente.

Además, los técnicos deberán tener la formación complementaria acreditada como Coordinador en materia de Seguridad y Salud y/o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, al menos en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, asegurando el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

La solvencia económica y financiera, permite justificar que la dimensión del trabajo encargado es acorde a la capacidad de volumen de negocio y que el volumen del contrato es conforme a la dimensión de encargo que tiene el adjudicatario, mientras que la solvencia técnica permite acreditar la experiencia requerida mediante trabajos similares efectuados a satisfacción.

La elección de los requisitos mínimos exigibles en cuanto a solvencia profesional y técnica se justifica por la naturaleza del servicio prestado mediante este Acuerdo Marco, relativos a la asistencia en materia de seguridad y salud en obras y proyectos de construcción, servicio que contiene un elevado componente técnico que requiere la combinación de conocimientos técnicos y la experiencia profesional adecuada y que pretenden apreciarse a través de los criterios establecidos como los criterios de solvencia.

En definitiva, la solvencia económico-financiera y la solvencia técnica exigida es acorde a lo dispuesto en la LCSP y suficiente para garantizar la buena ejecución del contrato, y los importes proporcionales al valor estimado del contrato, fomentando a la vez la mayor concurrencia posible de los distintos agentes existentes en el sector.

#### JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA:

En atención de la Consideración recogida en el informe del Servicio Jurídico en relación con el Proyecto de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este acuerdo marco sobre la necesidad de una mayor justificación de la elección de los criterios de solvencia, se indica lo siguiente:

La solvencia exigida en el presente Acuerdo Marco busca el equilibrio necesario entre el cumplimiento del objeto del contrato y la garantía una amplia concurrencia de licitadores, por lo que estos se han fijado como una solución de compromiso que permita a la Administración garantizar los adecuados estándares de calidad del servicio prestado y además permita que un elevado número de agentes del sector puedan participar, fomentando la concurrencia.

Del análisis del mercado que constituyen los prestadores del servicio objeto del Acuerdo Marco, se comprueba que se trata de un colectivo caracterizado por atomización, con predominio de pequeñas empresas constituido por un número reducido de empleados en el que predomina la alta especialización.

Asimismo, la naturaleza de los trabajos que prestan, y que coinciden con el objeto del contrato, se caracteriza por trabajos de reducida cuantía económica, que guarda coherencia con el valor estimado de este contrato, y que se suelen desarrollar por los agentes en paralelo para diferentes obras, según su volumen.

Además, se trata de un trabajo de alta responsabilidad ya que su objetivo es garantizar la observancia de la seguridad y protección del personal de la obra, las medidas a adoptar y su cumplimiento, por lo que ha de tenerse en cuenta en la exigencia de la solvencia requerida.

En base a lo anterior se establece la solvencia de la siguiente forma:







### Solvencia económica y financiera:

Para la fijación de la solvencia económico financiera se estable dos opciones, bien sea mediante volumen de negocio, bien mediante un seguro de responsabilidad civil, ambos amparados por la LCSP:

- Artículo 87.1 a) de la LCSP: *“Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas”*:

La exigencia de un volumen mínimo de negocio de 35.256,24 euros, que es acorde a los importes que suelen presentar las empresas del sector y al tipo de contratos que ampara el acuerdo marco.

Asimismo, comparado con el valor estimado del contrato, este se considera adecuado para garantizar que el adjudicatario dispone de la capacidad económica y financiera de los contratos basados que se estiman adjudicar.

- Artículo 87.1 b) de la LCSP: b): *“Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales”*:

Al exigirse un importe no inferior al valor estimado del contrato, acorde con lo preceptuado en la LCSP, se considera un criterio adecuado para salvaguardar el control de riesgos, asegurar la continuidad operativa y, asimismo, fortalecer la competitividad y transparencia del procedimiento.

Al incluir ambas posibilidades de acreditación, se facilita la concurrencia al adaptarse a la realidad y circunstancias que pueden darse entre las empresas del sector.

### Solvencia técnica:

Para la acreditación de la solvencia técnica se opta por la existencia de experiencia previa en trabajos de similar o idéntica naturaleza, mediante su volumen y que se dispone del personal adecuado para su ejecución, ambos casos amparados por la LCSP:

- Artículo 90.1.a) de la LCSP *“Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos”*:

Este criterio establece un importe mínimo (16.452,91 euros) que permite asegurar la experiencia de la empresa en los trabajos similares que coincidan con el objeto de este acuerdo marco y de esa manera garantizar que se cuanta con la experiencia suficiente para garantizar un trabajo con la calidad exigida. Asimismo, esta cuantía es coherente con las características de las empresas del sector, lo que facilitará también la concurrencia.

- Artículo 90.1.e) de la LCSP *“Títulos académicos del responsable de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma”*:

Se elige este criterio de solvencia para que las empresas acrediten la capacidad técnica suficiente, mediante el personal, en número y con titulación adecuada para garantizar que los trabajos que se puedan encargar se realicen en los plazos y calidad exigible. Así, los técnicos deben estar en posesión del título de arquitecto o arquitecto técnico o equivalente, ya que el objeto de las obras es la construcción de edificios, para los usos indicados en el artículo 2.1.a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es decir, edificaciones de uso docente.

Además, los técnicos deberán tener la formación complementaria acreditada como Coordinador en materia de Seguridad y Salud y/o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, al menos en la especialidad de Seguridad en el Trabajo para acreditar que estén capacitados legalmente para desarrollar las funciones que el RD 1627/1997 les atribuye.

La elección de los requisitos mínimos exigibles en cuanto a solvencia profesional y técnica se justifica por la naturaleza del servicio prestado mediante este Acuerdo Marco, relativos a la asistencia en materia de seguridad y salud en obras y proyectos de construcción, servicio que contiene un elevado componente técnico que requiere la combinación de conocimientos técnicos y la experiencia profesional adecuada y que pretenden apreciarse a través de los criterios establecidos como los criterios de solvencia.





## JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El expediente de referencia se va a realizar por un procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios.

El procedimiento es abierto para permitir la mayor concurrencia posible de licitadores, favoreciendo de esta forma la competencia y con ello que la Administración tenga una mayor cantidad de ofertas que permitan la elección de la más favorable para los intereses públicos.

El procedimiento es simplificado, de acuerdo con el art. 159 del la LCSP, al ser el valor estimado del servicio inferior a 140.000 euros.

Dado el carácter especializado del servicio, además del precio se incluyen otros criterios objetivos de carácter técnicos con un reparto de puntuación del 49% para el precio y el 51% restante para los criterios objetivos.

Es de destacar que este criterio responde a lo dispuesto en el artículo 145.4 de la LCSP que establece que “los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas”, puesto en relación a lo dispuesto en la DA41 de la citada LCSP “se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en esta Ley”.

Dicha cuestión ha quedado ya solventada en diversas resoluciones del TACP, condicionando la asignación de puntuaciones, en el caso de que los trabajos requieran la participación de titulados en arquitectura o ingeniería, circunstancia que se recoge en este caso al exigirse en el punto 4.2 del PPT que tanto el interlocutor como el equipo técnico estén en posesión de la titulación de Arquitectura o Arquitectura Técnica o equivalente, dado que el objeto de las obras es la construcción de edificios.

Asignación de puntuación al precio: La puntuación, hasta un total de 49 puntos, se asignará de la siguiente forma:

$$\text{Puntos} = (B_i / B_M) * 49$$

Siendo:

$B_i$ : Baja del licitador

$B_M$ : mayor baja de todas las presentadas

Baja: precio de licitación – Oferta económica del licitador

Las bajas se expresan en porcentaje.

Esta fórmula evita que reducidas bajadas en el precio supongan altas variaciones en la puntuación, escalando la puntuación en función del esfuerzo en la bajada del precio.

Bajadas desproporcionadas:

Para la determinación de los que se considera una bajada desproporcionada se ha seguido el criterio establecido en el artículo 85 sobre criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Asimismo, respecto de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el artículo 86.1 del RGLCAP se aplicará a las empresas de un mismo grupo que concurran separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de una unión temporal de empresarias y/o empresarios.

Asignación de puntuación a criterios de valoración objetiva

A su vez, los 51 puntos asignados mediante este procedimiento de valoración se agrupan en dos bloques, uno de 30 puntos y otro de 21 puntos.





El primer bloque, valorado con 30 puntos, corresponde a los criterios asociados a la experiencia del equipo mínimo (interlocutor y 1 técnico).

En la asignación de la puntuación se valorarán los años de experiencia acreditada en tareas de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de proyectos y obras de edificación, desarrolladas para la Administración Pública, superiores al mínimo de 5 años exigido, de la forma siguiente:

- o Por cada técnico cuya experiencia sea superior a 5 años, hasta 10 años: 5 puntos
- o Por cada técnico cuya experiencia sea superior a 10 años: 10 puntos.

Por considerarse que esta es un factor esencial para el desarrollo de los trabajos y que a cuanto mayor experiencia se aporte mayor será la calidad aportada al trabajo.

En el segundo bloque se valora el incremento de medios personales a disposición del contrato, hasta un máximo de 21 puntos, de la siguiente forma:

- o Por cada técnico adicional en el equipo con más de 5 años de experiencia: 7 puntos.

Esta puntuación se justifica porque cuanto mayor número de titulados con experiencia se aporte al contrato mejor será la cobertura prestada en el contrato donde, con seguridad, confluirán varias obras al tiempo.

## JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En atención de la Consideración recogida en el informe del Servicio Jurídico en relación con el Proyecto de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este acuerdo marco sobre la necesidad de una mayor justificación de la elección de los criterios de adjudicación, se indica lo siguiente:

- Experiencia del equipo mínimo (interlocutor y 1 técnico). Hasta 30 puntos.

Se considera que la experiencia es un factor esencial para el desarrollo de los trabajos y que a cuanto mayor experiencia se aporte mayor será la calidad aportada al trabajo.

La asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras y proyectos resulta de especial importancia en el transcurso de las obras y, por tanto, en el resultado final de la ejecución, por ello la experiencia aportada por el personal técnico que lo ha de llevar a cabo es fundamental por los siguientes motivos:

### 1. Garantía de Cumplimiento Normativo

El personal experimentado conoce las normativas técnicas, protocolos de seguridad y requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud. Esto asegura que cada fase del proyecto cumpla con las regulaciones, evitando ejecuciones fuera de norma y situaciones de riesgos futuros para los trabajadores y personal ajeno a la obra.

### 2. Detección Temprana de Riesgos

La experiencia permite identificar situaciones de riesgo en los procesos de construcción antes de que se conviertan en problemas graves. Esto reduce los posibles accidentes.

### 3. Optimización de Procesos

Un equipo con trayectoria profesional adecuada sabe cómo aplicar controles eficientes, adoptar soluciones adecuadas y garantizar que el proyecto y su ejecución se adapte a lo requerido por la normativa de seguridad y salud.

### 4. Garantía de seguridad

La experiencia en materia de seguridad y salud en la ejecución de las obras tiene una influencia fundamental en la revisión y detección de riesgos o incumplimientos que podrían comprometer la seguridad de la obra, protegiendo tanto a los trabajadores como a otras personas que puedan estar utilizando el edificio.





En consecuencia, se exige una experiencia mínima de madurez profesional para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de cinco años ya que se considera que en dicho periodo un profesional dispone del suficiente nivel técnico para la correcta ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que el conocimiento que adquiere un profesional es acumulativo a lo largo de su vida profesional, una vez superado los primeros años de maduración, que se fijan en los cinco primeros, el profesional va mejorando sus habilidades y conocimientos en base a la experiencia que acumula, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de un acuerdo marco complejo, que abarcará numerosos encargos de diversa índole (obra nueva, pequeñas reformas en edificios en uso, grandes reformas que afectan a distintos elementos de los edificios, etc), donde un equipo experimentado puede anticipar problemas técnicos, optimizar los procesos de construcción, coordinar con eficacia con direcciones facultativas y empresas constructoras, reduciendo riesgos y accidentes en las obras.

Para valorar este incremento de experiencia aportada en el equipo, que tiene una relación directa con la calidad del trabajo que pueda desarrollar se ha optado por marcar aun escalonamiento en los 10 años, por considerar que a partir de dicha experiencia adicional el grado de conocimiento acumulado permite ser considerado un gran conocedor de la materia y por tanto con mayor capacidad de resolver problemas

Contar con personal experimentado en las medidas de seguridad y salud, con conocimiento de normativas técnicas y conocimientos de actuaciones previas, permitirá anticiparse y detectar posibles riesgos con antelación, garantizando una ejecución segura de los proyectos, estando esta circunstancia prevista en el art. 145.2.2º LCSP, al existir una incidencia significativa de la calidad del personal en la mejor ejecución y éxito del contrato.

Por ello en el contrato se establecen tres escalones, de cinco años de experiencia cada uno:

El primero de 5 años, porque se considera como el tiempo mínimo de experiencia para garantizar la correcta ejecución del contrato y por tanto un nivel exigible como condición imprescindible mínima.

El segundo, con una experiencia de entre 5 y 10 años, que valora, como criterio de adjudicación, la calidad y capacidad de resolver problemas en base a una experiencia adicional al mínimo exigible para garantizar la solvencia del personal y que, por tanto, debe ser valorada como criterio de calidad adicional de la oferta

El tercero, que es la experiencia aportada por personal con más de 10 años de experiencia, que garantiza una capacidad casi absoluta para resolver cualquier problema y en un tiempo corto por considerarse un gran experto en la materia.

- Incremento de medios personales puestos a disposición del contrato. Hasta 21 puntos.

Se elige este criterio de adjudicación, ya que, junto al personal mínimo suficientemente experimentado, también es importante que esté disponible en número suficiente para poder abordar cualquier aumento de necesidades, sin que esto sea un valor limitativo en el desarrollo simultáneo de trabajos u obras.

Estos criterios de adjudicación se entienden idóneos para conseguir que se presenten ofertas económicamente convenientes y que lleven a una mayor calidad en la ejecución del trabajo.

## **JUSTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN ESPECIAL**

En cuanto a las condiciones especiales de ejecución del contrato recogidas en el apartado 16 del cuadro de características del acuerdo marco, se opta por la adopción de medidas concretas para favorecer la formación de los trabajadores en el lugar de trabajo, a cuyo fin la empresa propuesta como adjudicataria presentará un plan detallado de formación del personal de la empresa (art. 202.2 LCSP). Esta condición, además de cumplir la exigencia legal recogida en el artículo 202.1 de la LCSP, es la más adecuada al objeto del contrato, ya que una buena formación del personal en la actividad propia del objeto del contrato va a permitir que la prestación fruto del mismo sea realizada de la forma más conveniente.





Se considera obligación esencial, cuyo incumplimiento dará lugar a la resolución del acuerdo marco.

#### JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CONDICIÓN ESPECIAL

En atención de la Consideración recogida en el informe del Servicio Jurídico en relación con el Proyecto de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este acuerdo marco sobre la necesidad de una mayor justificación de la elección de la condición especial, se indica lo siguiente:

La actividad que pretende cubrir el Acuerdo Marco, tiene un gran componente de conocimiento, tanto en aspectos tecnológicos como de seguridad y prevención de riesgos laborales, de fuerte impacto en el sector de la construcción, por lo que se ha considerado adecuado la inclusión de aspectos formativos como condición especial de ejecución.

#### JUSTIFICACIÓN DE LAS PENALIDADES

Para asegurar la correcta ejecución del trabajo a contratar, y que el trabajo se lleve a cabo en el tiempo previsto, se hace necesario la inclusión de posibles penalidades, que sancionen, en su caso, la ejecución defectuosa que se lleve a cabo por la empresa adjudicataria desviándose del Pliego de Prescripciones Técnicas y las indicaciones del director de los trabajos y, por otra parte, se prevé la sanción en caso de demora en los plazos previstos para su ejecución.

En el caso de los posibles incumplimientos por demora en los plazos previstos, requerimos que su cumplimiento sea estricto y puntual, no sólo como obligación contractual, sino para garantizar que los trabajos estén completamente ejecutados en la fecha prevista y que permita el inicio de la obra, por ejemplo, en el caso de la aprobación del plan de seguridad y salud, trabajo que forma parte de la coordinación en materia de seguridad y salud y se pueda entregar sin retrasos al uso y servicio público educativo. La importancia del cumplimiento de los plazos en estas circunstancias concretas de este expediente, hace necesario prever las penalidades previstas legalmente en el punto 193.3 LCSP cuya cuantía asciende a 0,60 euros al día por cada mil euros del precio del contrato. La realización de las obras, objeto de la coordinación de seguridad y salud o del proyecto en el que se integra el estudio de seguridad y salud redactado o supervisado, en plazo, viene a garantizar el derecho a la educación, que como derecho fundamental aparece recogido en el art. 27 de la Constitución Española.

Para conseguir las finalidades descritas anteriormente se prevé en el apartado 22 del cuadro de características del acuerdo marco del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la posibilidad de imposición de penalidades por demora en el cumplimiento de los plazos de ejecución del trabajo o en caso de ejecución defectuosa del mismo; regulándose los tipos de penalidades leves, graves o muy graves y sus correspondientes cuantías, lo mismo que el procedimiento de su tramitación, siguiendo los principios de proporcionalidad, causalidad, y otros propios de todo procedimientos sancionador.

Se contemplan también `penalidades por incumplimiento de las condiciones formales del acuerdo marco o sus contratos basados. En esta tipificación se incluyen aquellos incumplimientos de obligaciones del adjudicatario referidas a aspectos inherentes a la actuación administrativa en cumplimiento del acuerdo marco y sus contratos basados. Estas obligaciones se refieren a la de presentar la documentación previa a la adjudicación del acuerdo marco, la de presentar la garantía definitiva y demás documentación previa a la adjudicación de los basados que se tramiten, y a la de atender la prórroga del contrato a que está obligado, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29.2 de la LCSP.

Se considerará que se ha producido un incumplimiento formal cuando el contratista no proceda a la presentación de la documentación previa a la adjudicación del acuerdo marco y se aplicará una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

Se considerará que se ha producido un incumplimiento formal cuando el contratista no proceda a la presentación de la garantía definitiva y demás documentación previa a la adjudicación de un contrato basado y se aplicará una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación de dicho contrato basado, excluido el IVA.





Igualmente se considerará que se ha producido un incumplimiento formal, cuando el contratista, habiendo recibido preaviso de prórroga, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del acuerdo marco, rechazase la formalización de dicha prórroga. En este caso, la penalidad alcanzará el 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ambos casos, es necesario establecer penalidad, ya que es el único instrumento que puede garantizar su cumplimiento, ya que no puede exigirse garantía provisional al tratarse de un procedimiento simplificado y no ser posible el uso de las garantías definitivas asociadas a cada contrato para finalidad distintas que motivaron su constitución.

Madrid, a la fecha de la firma.  
**EL DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**

Firmado digitalmente por: GARCÍA RODRÍGUEZ IGNACIO  
Fecha: 2026.04.17 15:30

Fdo.: Ignacio García Rodríguez.

